

Actualización de hechos violentos:

Temporalidad: 1 de diciembre 2023 - 12 de julio 2024

En febrero de 2024 organizaciones de la sociedad civil publicamos un informe detallando la crisis de inseguridad que azota la región fronteriza del estado de Chiapas con Guatemala. Desde entonces, los episodios violentos no sólo han proseguido, sino que se han expandido a otras áreas del estado evidenciando la agudización de la crisis señalada. En el presente documento exponemos una actualización de los hechos más emblemáticos ocurridos entre el 1 de diciembre de 2023 y el 12 de julio de 2024. El enfoque del monitoreo sigue siendo el área fronteriza central que comprende las regiones de la Meseta Comiteca Tojolabal y la Sierra Mariscal, además de otras áreas del estado por las que se está extendiendo la violencia de la disputa criminal que también serán señaladas aquí.

El área fronteriza ha registrado constantes episodios de desplazamiento forzado, en su mayoría derivados de enfrentamientos armados. En enero, los combates repetidos desencadenaron una aguda crisis de desplazamiento que persiste hasta hoy. El 15 de enero, se produjeron fuertes enfrentamientos entre las comunidades de Nuevo Chejel, municipio de Socoltenango, y Nueva América, municipio de Chicomuselo. Al día siguiente, el 101 Batallón de Infantería de la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) con sede en Chicomuselo, bajo el mando del Coronel Solís Serna, llegó al lugar reprimiendo de manera directa a la población civil, haciendo un uso excesivo de la fuerza, incluyendo gases lacrimógenos y armas de fuego. Como resultado, al menos siete comunidades de tres municipios se desplazaron, con un número aproximado de 2300 personas. Este evento llevó al Sistema Estatal de Protección Civil a abrir albergues temporales en Tzimol, Socoltenango y La Trinitaria, y a la Iglesia Católica a instalar refugios en Comitán de Domínguez. Pese a ello, las autoridades no llegaron a reconocer el número real de desplazados, cuestión también vinculada a la intermitencia y la heterogeneidad del desplazamiento. En efecto, muchas personas se refugiaron de manera permanente con familiares ya establecidos en las comunidades de acogida, mientras que muchas otras se ven obligadas a retornar a las comunidades afectadas por la violencia a pesar de la ausencia de garantías de seguridad, debido a la falta de medios de sustento en el desplazamiento.

Otro enfrentamiento significativo ocurrió el 31 de marzo en la comunidad Niños Héroes, en el municipio de La Concordia. En la rivera de la presa La Angostura, un grupo armado se enfrentó a elementos de la Guardia Nacional en presencia de cuarenta civiles, entre los que se contaban mujeres, niños y niñas, adolescentes y personas mayores. En el enfrentamiento, un número indeterminado de civiles resultaron muertos y heridos. Según testimonios, al terminar el enfrentamiento la Guardia Nacional ordenó a los civiles presentes despejar el lugar, impidiendo que la policía de investigación adscrita a la Fiscalía General del Estado entrevistara a los testigos y cumpliera la cadena de custodia. Tampoco fue enviado personal de salud al lugar de los hechos.

Entre el 10 y el 13 de abril, un enfrentamiento entre grupos delincuenciales en Amatenango de la Frontera provocó desplazamientos masivos. En junio, la mayoría de los Testigos de Jehová de la comunidad de Rodolfo Figueroa, en el municipio de Frontera Comalapa, que representaban el 60% de la población total, fueron desplazados por la fuerza debido a su negativa a colaborar con el grupo criminal dominante en la región. Más recientemente, el 12 de julio, se registró un enfrentamiento de 12 horas entre grupos criminales entre Amatenango de la Frontera y Motozintla.

El desplazamiento forzado en la región ha tenido múltiples impactos sobre el territorio, incluyendo la configuración de pueblos fantasma, de los cuales comunidades enteras huyeron, abandonando a adultos mayores, personas con problemas de movilidad, animales, propiedades y vehículos. Ejemplo de ello son los pueblos de Piedra Labrada, 20 de Noviembre, Galicia y Zacualpa, en el municipio de Chicomuselo.

Otro hecho preocupante acontecido en el mismo municipio es la agresión dirigida contra la población civil el 12 de mayo en el ejido de Nueva Morelia, que tuvo como resultado una masacre. Elementos armados de un grupo criminal entraron en casas de civiles asesinando a 11 personas, 6 hombres y 5 mujeres, una de ellas menor de edad y otra en silla de ruedas. Nueva Morelia ya había sido objeto de un enfrentamiento con una duración de 7 horas, el 4 de enero, el cual provocó dos muertos no combatientes y el desplazamiento de al menos 700 personas.

La Concordia se ha convertido en un municipio que ha registrado sucesos violentos especialmente alarmantes en los últimos meses, además de la masacre ya mencionada de La Angostura acontecida a finales de marzo. La noche del 13 de junio, un enfrentamiento entre la Guardia Nacional e integrantes de un grupo armado en la colonia Guadalupe Victoria. Cuatro días después, el 17 de junio, habitantes de las comunidades de El Diamante, Agua Prieta, Juan Sabines y La Independencia informaron sobre otro choque entre bandas del crimen organizado. El 1 de julio, la Fiscalía General del Estado reportó la localización de 19 cuerpos en el interior de un camión en las inmediaciones de un camino de terracería que conduce a Jaltenango, todos ellos vestidos con ropa oscura y chalecos tácticos, presuntamente miembros de un grupo armado y asesinados en un enfrentamiento. Al menos 4 de las personas fallecidas portaban identificaciones emitidas por el gobierno de Guatemala.

Entre las estrategias de control poblacional desplegadas en la región, destacan las desapariciones de civiles. Aunque la mayoría de los casos no han sido denunciados por miedo a represalias, la Fiscalía General del Estado ha registrado 27 desapariciones desde diciembre de 2023 hasta el 12 de julio de 2024 en los municipios de Chicomuselo, Frontera Comalapa, Trinitaria, Motozintla, Comitán y Las Margaritas. Entre ellos se encuentran Werclaín Hernández Domínguez, comisariado ejidal de Pablo L. Sidar en el municipio de Chicomuselo, desaparecido el 7 de marzo; e Irán Guanerges Mérida Matamoros, exalcalde de Frontera Comalapa y precandidato a la presidencia municipal, desaparecido el 14 de diciembre. Irán Mérida apareció en un vídeo el 29 de abril siendo interrogado por individuos armados, esposado y con los ojos vendados. Otro caso es el de Rey David Gutiérrez Vázquez, candidato del PT a la alcaldía de Frontera Comalapa, secuestrado por individuos armados el 17 de abril en su domicilio. A pesar de haber aparecido en un vídeo el 1 de mayo declarando estar bien, no ha sido visto en el municipio desde el día de su secuestro.

La disputa territorial de los grupos del crimen organizado también se ha extendido al control del campo político-electoral en el período que antecedió a las elecciones del 2 de junio. Prueba de ello es el hecho de que Chiapas haya destacado este último período electoral como el estado más violento de México, según Data Cívica, con 53 ataques contra políticos. Esta estrategia de control político incluyó presiones para coaccionar el voto, reclutamiento forzado para asistencia a mítines electorales y concentraciones en carreteras para recibir delegaciones de partidos políticos durante sus campañas. En este contexto, es revelador el incidente que vivió la Presidenta electa Claudia Sheinbaum durante su recorrido de campaña en el tramo carretero de Frontera Comalapa a Motozintla el 21 de abril. Mientras se dirigía hacia la cabecera municipal de Motozintla, la entonces candidata de Morena fue abordada por al menos 30 individuos, muchos de ellos encapuchados y armados, quienes le obstaculizaron el paso. Esta interferencia del crimen organizado en el proceso electoral también se evidenció en la quema

de boletas electorales en varios pueblos de Chiapas, incluyendo Chicomuselo. A tan solo 48 horas de las elecciones, hombres encapuchados incendiaron las oficinas del Consejo Municipal Electoral en esta localidad. Como consecuencia, el INE ordenó la no instalación de 108 mesas electorales en el estado, incluyendo todas las casillas del municipio de Chicomuselo. A nivel nacional, el número total de mesas electorales no instaladas fue de 202, más de la mitad de ellas ubicadas en Chiapas. Otro evento de violencia electoral destacable fue el asesinato de la candidata a la presidencia municipal de La Concordia, Lucero López Maza, junto a otras cinco personas, el 16 de mayo.

Como ya hemos mencionado, la crisis de violencia no se ha limitado a la zona fronteriza de Chiapas con Guatemala, y en el período analizado otras zonas del estado han reflejado un recrudecimiento de las condiciones de seguridad. En Ocozocoautla de Espinosa, municipio que constituye un enclave estratégico al encontrarse en la bifurcación de la carretera panamericana, por un lado hacia Veracruz, por otro lado hacia Oaxaca, han ocurrido repetidos enfrentamientos y asaltos a vehículos privados y autobuses con bajas mortales. A su vez, se han convertido en habituales los ataques dirigidos a autoridades en el municipio por parte de grupos del crimen organizado. El 23 de febrero, Germán Alegría, secretario de Seguridad Pública de Berriozábal, fue secuestrado junto con otros dos policías. Al día siguiente, sus cuerpos fueron encontrados sin vida dentro de una camioneta. Un vídeo difundido en redes sociales mostraba a Alegría durante un interrogatorio, donde señalaba a funcionarios públicos por estar vinculados con el grupo de delincuencia organizada que controla la región. El día 15 de marzo, un enfrentamiento y persecución entre miembros de la SEDENA y de un grupo armado en el área del puente Tzu-Tzu, en Ocozocoautla, ocasionó la muerte de 2 personas y un herido. Más recientemente, el 19 de junio, una emboscada en contra de agentes de la Guardia Nacional tuvo como resultado un muerto y dos heridos. Recordemos que en junio de 2023 catorce funcionarios públicos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana fueron secuestrados en Ocozocoautla y mantenidos en cautiverio durante varios días.

Otro suceso reseñable en la zona ha sido el hallazgo el 10 de junio de un cadáver colgado de un puente en la carretera entre este mismo municipio y Tuxtla Gutiérrez con un mensaje de un grupo criminal amenazando a los mismos funcionarios públicos mencionados por Germán Alegría en febrero.

El panorama recién descrito no pretende ser exhaustivo, sino presentar los eventos más relevantes y graves sucedidos entre diciembre y julio de 2024. En este período, no obstante, es importante también destacar la minimización que desde las instituciones y en particular desde el Gobierno se ha realizado de la situación de Chiapas. A raíz de las cifras de muertos presentadas en un comunicado sobre el enfrentamiento sucedido en la presa de la Angostura a finales de marzo, el expresidente de la República declaró públicamente la falsedad de tales números y denunció una magnificación de la violencia en Chiapas por parte de las organizaciones no gubernamentales de la región. Tanto estos ataques directos contra la sociedad civil como la negación de la situación de violencia en el estado agravan la dinámica de inacción y negligencia de las autoridades: ni se han desplegado planes exhaustivos de atención a las víctimas ni estrategias que rompan el silencio derivado del clima de terror en el que vive la población, con impactos diferenciados sobre mujeres, niñas, niños, personas en movilidad y personas de la tercera edad.

Nota:

Si bien muchos de los hechos aquí narrados proceden de fuentes públicas, muchos otros son fruto de testimonios y fuentes directas.